



Institucionalidad y consenso: binomio para el desarrollo y la competitividad

Por: *Ninotshka Tam*

Analista del CNC

Institucionalidad y consenso: binomio para el desarrollo y la competitividad

Durante los últimos quinquenios Panamá ha venido creciendo a un ritmo muy superior al resto de la región lo que ha permitido al país una sensible mejora del ingreso per cápita. Igualmente en el quinquenio venidero, a pesar de que la expansión económica será inferior, se prevé una tasa que volverá a colocar a la nación como líder regional.

Sin embargo, también resulta evidente que persisten problemas estructurales que puede resultar un impedimento para que esta senda de crecimiento sea sostenida, y se requieren por demás profundas reformas para que esa expansión redunde de forma efectiva en favor de una mayor equidad y una sensible reducción de la pobreza.

Una fórmula para identificar esos retos estructurales es a través de los indicadores del Foro Económico Mundial (FEM). Dicha evaluación arroja luces respecto de los cuellos de botella que impiden a Panamá lograr estos objetivos y las posibles soluciones.

Por ejemplo, Panamá presenta favorables condiciones en su nivel de infraestructura física, y el desarrollo de su mercado financiero. Además, a pesar del creciente endeudamiento y ritmo del gasto público, el país viene presentado un “performance” positivo en su entorno macro económico, en la eficiencia de su mercado de bienes, la innovación y la tecnología, y la sofisticación de sus negocios.

Por otro lado, el país presenta retrasos en la calidad de sus instituciones por ejemplo, en la provisión de la salud pública, y de su educación -principalmente la secundaria-. Igualmente muestra deficiencias en la capacitación a nivel de su educación superior. A estos desafíos se suma la necesidad de mejorar la justicia y la confianza de la comunidad en los políticos, y en general de reducir la corrupción.

A simple vista, pudiera llegarse a la equivocada conclusión de que se tratan en su mayoría de tareas o sacrificios pendientes exclusivamente por parte del sector público o de los estamentos políticos. No obstante, por ejemplo persisten cuantiosos subsidios y exoneraciones (algunos sociales y otros dirigidos a las empresas) lo

cual deviene en abultados gastos presupuestales y provoca distorsiones e ineficiencias económicas. Más aun, en el caso de

mercado laboral subsisten serios cuellos de botella derivados de rigideces y de insuficiente capacitación que inhiben la productividad y que exigen un profundo compromiso de cambio de parte de los gremios laborales.

Algunas de estas áreas de reforma requieren pocos recursos y exigen más bien voluntad de transformación. Sin embargo dichos cambios solo pueden lograrse a través de un amplio consenso en donde prevalezca la confianza y la certeza de que, cualesquiera sacrificios constituyen meramente condiciones transitorias, y que los beneficios que derivarán de las reformas pendientes superarían con creces esos sacrificios temporales.

Por una razón u otra en nuestro país en ocasiones los actores se suman en una especie de inamovilidad o inacción donde prevalece el interés particular en vez del general, el antagonismo en vez del consenso, lo que solo puede superarse a través de la iniciativa de todos los involucrados y en un efectivo liderazgo, pero sobre todo una visión común de país que brinde confianza a todos los involucrados.

Requiere por ende deponer intereses particulares y restablecer condiciones que refuercen una institucionalidad que se fundamente en una aplicación imparcial y amplia del estado de derecho y la justicia para desarrollar un modelo incluyente que genere incentivos para la participación de todos los sectores.

Solo mediante la prevalencia del pluralismo, la democracia y la libertad plena podemos en efecto transitar de un modelo que ha estado generando crecimiento pero con poca equidad y justicia hacia uno que garantice mayor sostenibilidad mediante un continuo aumento de la competitividad económica y de la justicia social. En democracia, eso implica la necesidad de desarrollar amplios consensos sobre la continuidad en la aplicación de las políticas públicas necesarias.